

CONV 350/02

WG II 14

NOTA

| | |
|---------|---|
| de la: | Secretaría |
| al: | Grupo II |
| Asunto: | Nota resumida de la reunión del viernes 4 de octubre de 2002, presidida por el Comisario António VITORINO |

El 4 de octubre de 2002, entre las 14.30 h. y las 17.30 h., se celebró la quinta reunión del Grupo II (Carta/CEDH), bajo la presidencia del Comisario Antonio Vitorino.

1. Tutela judicial efectiva y acceso de los particulares al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

El Presidente recordó al Grupo el documento de trabajo n.º 21, que, basándose en varias propuestas presentadas por miembros del Grupo y otros convencionales, ofrece una visión de conjunto sobre la cuestión de las vías de recurso judiciales y del acceso de los particulares al Tribunal de Justicia, en el contexto del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. El Presidente destacó que, si bien era cierto que este tema estaba vinculado al tema general de los derechos fundamentales, se planteaba con independencia tanto de la cuestión de una posible integración de la Carta en los Tratados, como de la de una adhesión de la Unión al CEDH.

En primer lugar, el Grupo escuchó la presentación por don Jacob Söderman, Defensor del Pueblo Europeo y observador de la Convención, de sus propuestas de artículos sobre las vías de recurso (judiciales y otras) en el tratado constitucional (véase el doc. CONV 221/02 CONTRIB 76). El señor Söderman sugirió, entre otras cosas, que se consagrara en dicho Tratado una obligación de los Estados miembros -tal y como ya la dedujera el Tribunal de Justicia del artículo 10 del TCE- de que sus tribunales nacionales garantizaran una tutela efectiva de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión. Además, el señor Söderman propuso que se facultara al Defensor para llevar ante el Tribunal de Justicia asuntos relativos a los derechos fundamentales y que se creara una base jurídica para la armonización de principios europeos comunes del Derecho administrativo.

El debate del Grupo se orientó en torno a las tres opciones indicadas en el documento de trabajo n.º 21 del Presidente.

Una gran mayoría de los oradores se mostró opuesta a la creación de un nuevo procedimiento judicial específico para la protección de los derechos fundamentales (por analogía con el "Verfassungsbeschwerde" o el recurso de amparo, opción "A" del documento de trabajo n.º 21). Se puso de relieve que, en caso de que la Carta se incorpore al tratado constitucional, las vías de recurso actualmente existentes en el sistema de la Unión en virtud del párrafo cuarto del artículo 230 y del artículo 234 del TCE también estarían a disposición de los ciudadanos en relación con los derechos dimanantes de la Carta, lo que sería en sí de un gran valor para la protección de los derechos fundamentales.

Algunos miembros señalaron que existirían lagunas de tutela judicial derivadas, en particular, de la condición formulada en el actual párrafo cuarto del artículo 230 del TCE, según la cual, el acto impugnado debe afectar al demandante no sólo directa, sino también individualmente. Dichos miembros propusieron, por lo tanto, reformular de manera limitada dicho párrafo cuarto a fin de colmar estas lagunas (opción "B" del documento de trabajo n.º 21). Además, se criticaron las limitaciones de la jurisdicción del Tribunal de Justicia existentes en el actual tercer pilar, así como la ausencia de protección contra los actos de órganos de la Unión como Europol.

Por otra parte, algunos oradores, sin querer negar la existencia de algunas lagunas concretas, expresaron su satisfacción general con el funcionamiento del sistema actual de recurso y advirtieron contra cualquier modificación profunda de este sistema y, en particular, contra el reparto de trabajo

entre el juez nacional y el comunitario derivado de la misma. Se señaló, en particular, la posibilidad de que tal modificación profunda supusiera una sobrecarga considerable del Tribunal de Justicia que pudiese prolongar los plazos procesales y, por lo tanto, ser perjudicial para una tutela eficaz de los ciudadanos. En referencia al principio de subsidiariedad, algunos oradores se mostraron interesados por la posibilidad de introducir en el Tratado una obligación para los Estados miembros de proporcionar a nivel nacional vías de recurso eficaces con respecto a los derechos garantizados por el Derecho de la Unión (opción "C" del documento n.º 21).

En conclusión, el Presidente consideró que la cuestión de una modificación del párrafo cuarto del artículo 230 del TCE y sus repercusiones institucionales deben estudiarse al mismo tiempo que otros aspectos, como los límites de la competencia del Tribunal de Justicia en las cuestiones que afectan al ámbito de la justicia y los asuntos de interior o el control judicial de la subsidiariedad. Según el Presidente, el Grupo debería, por lo tanto, abstenerse de hacer recomendaciones concretas y, más bien, llamar la atención de la Convención hacia este tema, así como hacia las distintas contribuciones presentadas al respecto por los convencionales, para que las estudie en un contexto adecuado.
